

*Soberanía alimentaria:
la agricultura
y la alimentación
en nuestras manos*



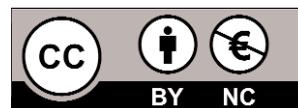
Soberanía alimentaria: la agricultura y la alimentación en nuestras manos

Prólogo	3
Introducción	5
Más allá de la seguridad alimentaria	6
Una breve definición	7
La Vía Campesina	9
Crisis alimentaria global	10
Falsas soluciones	13
Un débil sistema agroalimentario	13
De exportadores a importadores	16
Generando cambio climático	18
Monopolios	20
Una opción viable	21
Notas	23
Bibliografía	23

Publica: Manu Robles-Arangiz Institutua
 Barrainkua, 13
 48009 BILBO
 www.mrafundazioa.org

ISBN 978-84-936523-8-8

Depósito legal





Esther Vivas (Sabadell, 1975) es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la Universitat Pompeu Fabra y colaboradora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma parte de la redacción de la revista Viento Sur.

Sus principales líneas de investigación son el análisis de los impactos sociales y medioambientales del modelo agroindustrial dominante, las alternativas al mismo, así como el estudio de los movimientos sociales.

Es autora de "En pie contra la deuda externa" (El Viejo Topo, 2008), coautora, junto a JM Antentas, de "Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street" (Ed. Popular, 2009) y coautora, junto a X. Montagut, de "Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos" (Icaria ed., 2009), "Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas" (Icaria ed., 2007) y "¿Adónde va el comercio justo?" (Icaria ed., 2006).

Más información en:

www.esthervivas.wordpress.com





A modo de prólogo

Anticapitalismo y crisis ecológica

Esther Vivas

La humanidad se enfrenta a una crisis ecológica global, cuya manifestación más evidente es el cambio climático. Nos encontramos ante una verdadera crisis de civilización en la que se unen una crisis económica y social y una crisis ecológica, energética y alimentaria. De este modo, se pone de manifiesto que el capitalismo no sólo no puede satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la humanidad sino que amenaza a su propia supervivencia y al equilibrio de la naturaleza.

La crisis ecológica no puede separarse del sistema económico y social que la ha generado. Por ello, combatir la crisis ecológica, y salvar el clima, requiere de la adopción de políticas que toquen al corazón del actual modelo de producción, distribución y consumo capitalista, y no meros retoques cosméticos. En este sentido, la crisis ecológica y el cambio climático plantean la necesidad de unir el combate por la justicia climática y por la justicia social, y de huir de las falacias del capi-

talismo verde y del barniz ecológico a las políticas social-liberales.

El capitalismo verde se apunta a la carrera del cambio climático, aportando una serie de soluciones tecnológicas (energía nuclear, captación de carbono de la atmósfera para su almacenamiento, agrocombustibles, etc.) que generarán mayores impactos sociales y medioambientales. Se trata de soluciones falsas que intentan esconder las causas estructurales que nos han conducido a la situación actual de crisis y que buscan hacer negocio con la misma.

El capitalismo no puede solventar una crisis ecológica global que él mismo ha creado. Su propia lógica, basada en la búsqueda del máximo beneficio y en la necesidad permanente de expandirse, topa con el equilibrio de la naturaleza. El beneficio a corto plazo y el tacticismo electoral, propios del capital y de la política gestionaria, choca con la perspectiva a largo plazo de la defensa de la humani-



dad, la vida, y el equilibrio de la naturaleza. Ambas lógicas marcan destinos alternativos para la humanidad.

Anticapitalismo y justicia ecológica y climática aparecen entonces directamente entrelazados. Cualquier combate contra el actual modelo económico que no tenga en cuenta la centralidad de la crisis ecológica está estratégicamente desorientado. Y toda perspectiva ecologista desprovista de una orientación anticapitalista está condenada al fracaso, a servir de coartada de políticas de lavado de imagen, a quedarse en la superficie del problema y puede acabar siendo un instrumento al servicio del marketing verde.

Establecer alianzas entre sindicalismo y ecologismo aparece como una cuestión estratégica central. Los sindicatos tienen el reto de integrar en su actividad cotidiana, su perspectiva general y su visión del mundo la dimensión ecologista. Y, al revés, el movimiento ecologista tiene que integrar la defensa de la justicia social y de los derechos sociolaborales en su horizonte de trabajo.

Un sindicalismo centrado sólo en la defensa de puestos de trabajo sin perspectiva ecologista no es la solución. Ni tampoco un ecologismo sin dimensión social. La posibilidad de generar, por ejemplo, un movimiento contra el cambio climático con una base social fuerte y con un objetivo simultáneo de justicia social y climática depende, en gran medida, de una buena articulación entre sindicatos y movimiento ecologista.

El diálogo entre sindicalismo y ecologismo, sin embargo, tiene que partir desde una firme voluntad de atajar la crisis ecológica y social desde la raíz, enfrentándose al núcleo duro del modelo económico y social actual. Ni el marketing verde ni el ecologismo de mercado pueden parar la degradación ecológica y el cambio climático, así como la concertación y la desmovilización frente a los recortes y los ataques patronales no pueden parar la erosión de los derechos y las conquistas sociales. Cambiar el sistema, cambiar el mundo de base, y defender "otro mundo posible" debe ser, sin duda, un horizonte común.



Soberanía alimentaria: la agricultura y la alimentación en nuestras manos

Esther Vivas

Introducción

La globalización neoliberal, en su trayectoria por privatizar todos los ámbitos de la vida, ha hecho lo mismo con la agricultura y los bienes naturales, sometiendo al hambre y a la pobreza a una inmensa parte de la población mundial. En la actualidad, se calcula que en el mundo hay 925 millones de personas hambrientas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando, paradójicamente, se producen más alimentos que nunca en la historia.

Como indica la organización internacional GRAIN (2008), la producción de comida se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan sólo se ha duplicado desde entonces, pero los mecanismos de producción, distribución y consumo, al servicio de los intereses privados, impiden a

los más pobres la obtención necesaria de alimentos.

El acceso, por parte del pequeño campesinado, a la tierra, al agua, a las semillas... no es un derecho garantizado. Los consumidores no sabemos de dónde viene aquello que comemos, no podemos escoger consumir productos libres de transgénicos. La cadena agroalimentaria se ha ido alargando progresivamente alejando, cada vez más, producción y consumo, favoreciendo la apropiación de las distintas etapas de la cadena por empresas agroindustriales, con la consiguiente pérdida de autonomía de campesinos y consumidores.

Frente a este modelo dominante del *agro-business*, donde la búsqueda del beneficio económico se antepone a las necesidades alimentarias de las personas y al respeto al medio ambiente, surge el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Una pro-



puesta que reivindica el derecho de cada pueblo a definir sus políticas agrícolas y alimentarias, a controlar su mercado doméstico, a impedir la entrada de productos excedentarios a través de mecanismos de dumping (vender a un precio inferior al del mercado local y a menudo por debajo del precio de coste), y a promover una agricultura local, diversa, campesina y sostenible, que respete el territorio, entendiendo el comercio internacional como un complemento a la producción local. La soberanía alimentaria implica devolver el control de los bienes naturales, como la tierra, el agua y las semillas, a las comunidades y luchar contra la privatización de la vida.

Más allá de la seguridad alimentaria

En los años 70, la FAO acuñó el término de seguridad alimentaria con el objetivo de defender el derecho y el acceso a la alimentación por parte de toda la población del planeta. Su origen se remonta a la crisis alimentaria de 1974, cuando el precio del grano y de las semillas se triplicó después que los Estados Unidos vaciaran sus stocks de excedente de grano que habían sido la base de los programas de ayuda alimentaria. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO de ese año, la seguridad alimentaria se convirtió en un objetivo explícito de la ONU.

Pero el concepto de seguridad alimentaria ha sido, a menudo, desposeído de su significado original y la industria agroalimentaria así como las instituciones internacionales lo han utilizado para justificar la exportación de alimentos, altamente subvencionados, de Estados Unidos o de la Unión Europea a países del Sur, con el objetivo “teórico” de acabar con el hambre en estos últimos. Estas prácticas, lejos de solucionar los problemas agrícolas y alimentarios en el Sur, los agudizan.

La práctica del dumping arruina al pequeño campesinado familiar, aumenta la migración del campo a las villas-miseria de las grandes ciudades, erosiona la soberanía alimentaria de estos países convirtiéndolos en dependientes del comercio internacional y aumenta la inseguridad alimentaria de sus poblaciones.

Como señala Peter Rosset (2009: 116): “La soberanía alimentaria sostiene que la alimentación de un país es una cuestión de seguridad nacional o de soberanía, como se prefiera. Si la población de un país depende, para la siguiente comida, de los caprichos y/o las oscilaciones de los precios en la economía global o de la buena voluntad de un superpoder de no utilizar la comida como arma (...) Entonces este país no está seguro, ni en el sentido de la seguridad nacional ni en el sentido de la seguridad alimentaria”.



Ante la constatación de que la seguridad alimentaria no representaba un paradigma alternativo a la agroindustria y a las políticas neoliberales, emergió a mediados de los años 90 el concepto de la soberanía alimentaria que incluía esta demanda e iba más allá.

¿Qué aporta de nuevo el concepto de soberanía alimentaria? Éste tiene por objetivo satisfacer la seguridad alimentaria de las personas, a la vez que pone en cuestión el actual modelo de producción agroalimentaria (intensivo, industrial, deslocalizado, “petrodependiente”, insostenible), así como las políticas de las instituciones internacionales que lo promueven.

La soberanía alimentaria pone en el centro a los campesinos y campesinas, apoyándoles en su lucha por producir alimentos al margen de las condicionalidades impuestas por el mercado, priorizando los circuitos locales y nacionales, rompiendo con el mito de que sólo los mercados y el comercio internacional podrán acabar con el hambre en el mundo y colocando la producción de alimentos, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Una breve definición

La soberanía alimentaria fue definida, en sus orígenes por el movimiento internacional de La Vía Campesina, como “el derecho de cada nación a mantener y a desarrollar su capacidad de producir alimentos básicos, en lo concerniente a la diversidad cultural y productiva” (Desmarais, 2007: 56).

Con los años, la definición que se ha extendido es la que queda recogida en la declaración *Nuestro mundo no está en venta. Primero está la soberanía alimentaria de los pueblos ¡Fuera la OMC de la agricultura y la alimentación!* (VVAA, 2003: 1): “La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias en materia de alimentación, a proteger y a reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autodependientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del dumping (...) La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológica-



mente sustentables". Esta declaración fue firmada por redes y organizaciones internacionales como La Vía Campesina, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, Amigos de la Tierra y Focus on the Global South, entre otros.

Para La Vía Campesina, quien impulsó este término en el año 1996 coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en Roma, la soberanía alimentaria tiene como objetivos principales: a) Dar prioridad a la producción de alimentos saludables, de buena calidad y culturalmente apropiados para el mercado doméstico. b) Apoyar con precios competitivos a los agricultores para protegerlos contra las importaciones a bajo precio. c) Regular la producción de los mercados internos para poner fin a los excedentes agrícolas. d) Desarrollar una producción sostenible basada en la familia agraria. e) Abolir cualquier ayuda a la exportación directa o indirecta (Desmarais, 2007).

La soberanía alimentaria implica devolver el control de los recursos naturales como la tierra, el agua y las semillas a las comunidades y a las y los campesinos y luchar contra la privatización de la vida. Como señala Desmarais (2007: 60): "Patentar las plantas, los animales y sus componentes significa para los campesinos y las comunidades indígenas la pérdida del control sobre los recursos que tradicionalmente usan y conocen".

El acceso a la tierra y una reforma agraria auténtica son una prioridad central. Así quedó recogido en la Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de La Habana (Cuba) en 2001: "La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y región, que permitan a los campesinos e indígenas (...) un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución" (VVAA, 2001: 1).

Alcanzar esta soberanía alimentaria requiere una estrategia que rompa con las políticas agrícolas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes promueven un modelo de producción agrícola y alimentaria insostenible. La declaración *Nuestro mundo no está en venta* no lo podría dejar más claro: "La OMC es una institución completamente inadecuada para hacerse cargo de los problemas de la agricultura y la alimentación. (...) No vemos que sea posible que la OMC se someta a una reforma profunda (...) Reclamamos que todo lo relativo a la alimentación y la agricultura sea excluido del ámbito de jurisdicción de la OMC" (VVAA, 2003: 4).



Pero reivindicar la soberanía alimentaria no implica un retorno romántico al pasado, sino que se trata de recuperar el conocimiento y las prácticas tradicionales y combinarlas con las nuevas tecnologías y los nuevos saberes (Desmarais, 2007). No debe consistir tampoco, como señala McMichael (2006), en un planteamiento localista, ni en una “mistificación de lo pequeño” sino en repensar el sistema alimentario mundial para favorecer formas democráticas de producción y distribución de alimentos.

Para investigadores como Henk Hobbelink de GRAIN, el concepto de soberanía alimentaria “ha conseguido trasladar tres mensajes que cada vez son más conocidos y compartidos: uno, desmitificar (...) que la competencia no es entre Norte y Sur. Segundo, el contraste que sigue habiendo entre desarrollo y medio ambiente va diluyéndose. Y el tercer punto, es el cuestionamiento de la tecnología en sí” (Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, 2010: 9).

La Vía Campesina

La Vía Campesina nació en 1993, en los albores del movimiento altermundialista, y progresivamente se convertiría en una de las organizaciones de referencia en la crítica a la globalización neoliberal. En la actualidad, La

Vía agrupa a unas 150 organizaciones de 56 países.

El ascenso de La Vía Campesina es la expresión de la resistencia campesina al hundimiento del mundo rural, provocado por las políticas neoliberales y la intensificación de las mismas con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sus orígenes se remontan a mediados de los años 80, cuando, coincidiendo con la Ronda de Uruguay del GATT, varias organizaciones campesinas realizaron importantes esfuerzos para internacionalizar el movimiento (Desmarais, 2007).

La Vía emergió como una alternativa más radical a la hasta entonces única estructura campesina internacional, la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), creada en 1946, representante de los intereses de grandes propietarios, dominada por grupos del Norte y favorable a las políticas de liberalización y al diálogo con las instituciones internacionales.

Las organizaciones afiliadas a La Vía son bastante heterogéneas, en términos de procedencia ideológica y de los sectores representados (sin tierra, pequeños campesinos...), pero todos coinciden en pertenecer a las franjas campesinas más pobres y golpeadas por el avance de la globalización neoliberal (Borras, 2004). Uno de sus logros más importantes ha sido el de superar, de forma bastante satisfactoria, la brecha entre los campesinos del



Norte y del Sur, articulando una resistencia conjunta al actual modelo de liberalización económica.

Desde su creación, La Vía ha promovido una identidad “campesina” politizada, ligada a la tierra y a la producción de alimentos, construida en oposición al actual modelo del *agro-business* y en base a la defensa de la soberanía alimentaria (Desmarais, 2007). La Vía encarna un nuevo tipo de “internacionalismo campesino” (Bello, 2009) que podemos conceptualizar como el “componente campesino” del nuevo internacionalismo de las resistencias representado por el movimiento altermundialista (Antentas y Vivas, 2009).

Una vez consolidada como proyecto internacional, en un contexto marcado por el ascenso progresivo del movimiento altermundialista, La Vía se fue orientando hacia la búsqueda de alianzas con otras organizaciones, en particular en la lucha contra la OMC, sobre todo a partir de Seattle, participando en campañas internacionales como por ejemplo la red *¡Nuestro Mundo no Está en Venta!* En las movilizaciones en Doha, Cancún y Hong Kong, los campesinos fueron uno de los actores más relevantes y visibles.

Detrás de esta política de alianzas estaba la comprensión de que la lucha campesina contra la agroindustria se inserta en un combate más amplio contra la globalización neoliberal y que la defensa de los intereses campesinos

requiere el cuestionamiento del conjunto del modelo, que sólo puede ser revertido a través de amplias coaliciones y alianzas entre organizaciones y sectores sociales distintos.

La Vía participó desde el comienzo en el proceso del Foro Social Mundial (FSM), cuya primera edición se celebró en enero de 2001, formando parte de sus instancias organizativas, el Consejo Internacional y el Secretariado Internacional. La implicación de La Vía en el proceso organizativo del FSM bajó con el tiempo y en los últimos años prefirió concentrarse en el impulso de campañas concretas frente a la OMC y algunas iniciativas propias como el Foro por la Soberanía Alimentaria de Nyéleni en 2007, en Malí, organizado conjuntamente con la Marcha Mundial de Mujeres, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, entre otros, y que permitió fortalecer alianzas y sumar a nuevos actores en la lucha por la soberanía alimentaria.

Crisis alimentaria global

La soberanía alimentaria se plantea como un paradigma alternativo al sistema agroalimentario global que nos ha conducido a una crisis alimentaria sin precedentes con 925 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Pero el problema actual no es la falta de



alimentos, sino la imposibilidad para acceder a los mismos.

En el año 2007 y 2008 la situación de hambruna en el mundo se agudizó a raíz del aumento del precio de los cereales como el maíz, el arroz, el trigo, etc. Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, éstos registraron, entre el 2005 y el 2006, un aumento del 12%; al año siguiente, en 2007, un crecimiento del 24%; y entre enero y julio del 2008 una subida de cerca del 50%. Los cereales y otros alimentos básicos como el trigo, la soja, los aceites vegetales, el arroz... fueron los que sufrieron los aumentos más importantes. El coste del trigo subió un 130%, la soja un 87%, el arroz un 74% y el maíz un 31%¹ (Holt-Giménez y Peabody, 2008).

En estas circunstancias, para los millones de personas en los países del Sur global que destinan entre un 50 y un 60% de la renta a la compra de alimentos, cifra que puede llegar incluso hasta el 80% en los países más pobres, el acceso a la comida se convirtió en imposible. De este modo, en países como Haití, uno de los más afectados por la crisis alimentaria del año 2008, se generalizó el consumo de tortitas de barro con sal.

Las razones coyunturales que explican este aumento espectacular de los precios, en 2007 y 2008, son dos: la creciente inversión en la producción de agrocombustibles y la especu-

lación financiera en materias primas. Es importante señalar que este aumento de los precios se estancó parcialmente a finales del 2008 con el estallido de la crisis económica, pero que en la actualidad, a mediados/finales del 2010, una vez tranquilizados los mercados financieros internacionales, el precio de las mercancías vuelve a subir.

El aumento del precio del petróleo, que se duplicó en el transcurso de los años 2007 y 2008 y que provocó una fuerte subida de los precios de los fertilizantes y del transporte relacionado con el sistema alimentario, tuvo como consecuencia una creciente inversión en la producción de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y otros subvencionaron la producción de agrocombustibles como una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entró en competencia directa con la producción de alimentos.

En abril del 2008, la FAO reconocía que “a corto plazo, es muy probable que la expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la agricultura de América Latina” (Reuters, 15/04/08). En la medida en que cereales como el maíz, el trigo, la soja o la remolacha fueron desviados a la producción de agrocombusti-



bles, la oferta de cereales en el mercado cayó y, consecuentemente, su precio aumentó.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los agrocombustibles generaron un aumento del precio de los granos de entre el 5 y el 20%; el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias de Estados Unidos (IFPRI en sus siglas en inglés) consideraba que esta cifra rondaba el 30% y un informe filtrado del Banco Mundial afirmaba que la producción de agrocombustibles habría repercutido en un aumento del 75% del precio de los granos (Holt-Giménez, 2008).

Otra causa fue la creciente inversión especulativa en materias primas, después del crack de los mercados puntocom e inmobiliarios. Tras el desplome del mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en los Estados Unidos, inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión...) y otros buscaron lugares más seguros y con mayor rentabilidad donde invertir su dinero. En la medida en que el precio de los alimentos subió, dirigieron su capital al mercado de futuros alimentario empujando el precio de los granos al alza y empeorando aún más la inflación en el precio de la comida.

Los mercados de futuros, tal como los conocemos actualmente, fechan de mediados del siglo XIX, cuando empezaron a funcionar en los Estados Unidos. Los contratos de futuros

son acuerdos legales estandarizados para hacer transacciones de mercancías físicas en un tiempo futuro establecido previamente. Éstos han sido un mecanismo para garantizar un precio mínimo al productor ante las oscilaciones del mercado, pero este mismo mecanismo es utilizado hoy en día por los especuladores para hacer negocio.

Los especuladores son quienes tienen más peso en los mercados de futuros, aunque sus transacciones de compra y venta no tienen nada que ver con la oferta y la demanda real, sino con sus intereses económicos. Estas transacciones se llevan a cabo en las bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la Bolsa de Comercio de Chicago.

En la actualidad, se calcula que una parte significativa de la inversión financiera en el sector agrícola tiene carácter especulativo. Según los datos más conservadores, esta cifra ascendería a un 55% del total, un volumen que aumenta en la medida en que se profundiza en la liberalización de la producción agrícola. Cabe señalar, también, un estudio de Lehman Brothers que indica cómo desde el año 2003 el índice de especulación en las materias primas (integrada en un 30% por materias agrícolas) ha aumentado en un 1900% (García, 2008a).



Falsas soluciones

Las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, la OMC, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la FAO, así como Estados Unidos, la Unión Europea y las grandes multinacionales del sector señalan que la causa de la crisis alimentaria reside en la falta de producción de alimentos. El número dos de la FAO, José María Sumpsi, lo dejaba bien claro al afirmar que se trataba de un problema de oferta y demanda debido al aumento del consumo en países emergentes como la India, China o Brasil (El País, 21/04/08).

En la misma línea, se posicionaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en el transcurso de la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO celebrada en Roma en junio del 2008, al señalar que era necesario aumentar en un 50% la producción de alimentos, a la vez que rechazaba las limitaciones impuestas a la exportación por parte de algunos países afectados por la crisis. Las "soluciones" que recomiendan estos organismos son las causas de la crisis alimentaria actual: mayor liberalización del comercio internacional agrícola, introducción de más paquetes tecnológicos y transgénicos, etc.

Como señalaba Eric Holt-Giménez (2008): "Estas medidas simplemente fortalecen al status quo corporativo que controla el sistema alimentario". La solución no puede ser más

libre comercio porque como se ha demostrado más libre comercio implica más hambre y menor acceso a los alimentos. No se puede argumentar que el problema hoy es la falta de comida, nunca en la historia se había dado una mayor producción de alimentos en el mundo. No hay una crisis de producción, sino una total imposibilidad para acceder a los mismos por parte de amplias capas de población que no pueden pagar los precios actuales.

Un débil sistema agroalimentario

Pero más allá de los elementos coyunturales que agudizaron la situación de hambruna a nivel global a lo largo de los años 2007 y 2008, existen causas de fondo que explican el porqué de la profunda crisis alimentaria actual.

Las políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años (liberalización comercial a ultranza, pago de la deuda externa de los países del Sur, privatización de los servicios y bienes públicos...) así como un modelo de agricultura y alimentación al servicio de una lógica capitalista son los principales responsables de esta situación. Nos encontramos ante un sistema alimentario global extremadamente vul-



nerable a las crisis económicas, ecológicas y sociales.

Como señala Holt-Giménez y Patel (2010), las políticas de “desarrollo” económico impulsadas por los países del Norte desde los años 60 en adelante (la revolución verde, los Programas de Ajuste Estructural, los tratados regionales de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio y los subsidios agrícolas en el Norte) generaron la destrucción de los sistemas alimentarios.

Entre los años 60 y 90, se llevó a cabo la denominada “revolución verde”, promovida por diversos centros de investigación agrícola e instituciones internacionales, con el “teórico” objetivo de modernizar la agricultura en los países no industrializados. Los primeros resultados en México y, posteriormente, en el sur y el sudeste asiático fueron espectaculares desde el punto de vista de la producción por hectárea, pero este aumento del rendimiento de la tierra no tuvo un impacto directo en la disminución del hambre en el mundo. Así, aunque la producción agrícola mundial aumentó en un 11%, el número de personas hambrientas en el mundo también ascendió en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597 (Riechmann, 2003)².

Como señalan Rosset, Collins y Moore Lappé (2000): “El incremento de la producción, centro de la revolución verde, no alcanza para aliviar el hambre porque no altera el

esquema de concentración del poder económico, del acceso a la tierra o del poder adquisitivo (...) La cantidad de personas que pasan hambre se puede reducir solo redistribuyendo el poder adquisitivo y los recursos entre quienes están desnutridos (...) Si los pobres no tienen dinero para comprar alimentos, el aumento de la producción no servirá de nada”.

La revolución verde tuvo consecuencias colaterales negativas para muchos campesinos medios y pobres y para la seguridad alimentaria a largo plazo. Este proceso aumentó el poder de las corporaciones agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel del agua subterránea, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades-miseria... desmantelando los sistemas agrícolas y alimentarios tradicionales garantes de la seguridad alimentaria.

A lo largo de los años 80 y 90, la aplicación sistemática de los Programas de Ajuste Estructural (PAE)³ en los países del Sur por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para que éstos pudieran hacer frente al pago de la deuda externa, agravó aún más las ya de por sí difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población en estos países. Los PAE tenían



como objetivo principal supeditar la economía del país al pago de la deuda aplicando la máxima de “exportar más y gastar menos”.

Las medidas de choque impuestas por los PAE consistieron en forzar a los gobiernos del Sur a retirar las subvenciones a los productos de primera necesidad como el pan, el arroz, la leche, el azúcar...; se impuso una reducción drástica del gasto público en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras...; se forzó la devaluación de la moneda nacional, con el objetivo de abaratar los productos destinados a la exportación pero disminuyendo la capacidad de compra de la población autóctona; aumentaron los tipos de interés con el objetivo de atraer capitales extranjeros con una alta remuneración, generando una espiral especulativa. En definitiva, una serie de medidas que sumieron en la pobreza más extrema a las poblaciones de estos países (Vivas, 2008).

A nivel comercial, los PAE promovieron las exportaciones, para conseguir mayores divisas, aumentando los monocultivos de exportación y reduciendo la agricultura destinada a la alimentación local con el consiguiente impacto negativo en la seguridad alimentaria y su dependencia respecto a los mercados internacionales. De este modo, se suprimieron las barreras aduaneras, facilitando la entrada de productos altamente subvencionados de Estados Unidos y de Europa que se vendían por debajo de su precio de coste, a

un precio inferior al de los productos locales, y que acabaron con la producción y la agricultura autóctona; así mismo se abrieron totalmente sus economías a las inversiones, a los productos y a los servicios de las multinacionales. Las privatizaciones masivas de empresas públicas, muchas veces a precio de saldo y de las que se beneficiaron mayoritariamente las multinacionales del Norte, fueron una práctica generalizada. Estas políticas tuvieron un impacto directo en la producción agrícola local y en la seguridad alimentaria, dejando a estos países a merced del mercado, de los intereses de las corporaciones transnacionales y de las instituciones internacionales promotoras de estas políticas.

La Organización Mundial de Comercio, establecida en el año 1995, consolidó las políticas de los Programas de Ajuste Estructural a través de tratados internacionales, supeditando las leyes nacionales a sus designios. Los acuerdos comerciales administrados por la OMC como el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en sus siglas en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en sus siglas en inglés) consolidaron aun más el control de los países del Norte sobre las economías del Sur.

Las políticas de la OMC forzaron a los países en desarrollo a eliminar sus aranceles a las



importaciones, acabar con protecciones y subsidios a los pequeños productores y abrir sus fronteras a los productos de las corporaciones transnacionales, mientras que los mercados del Norte se mantenían altamente protegidos. En la misma dirección, los tratados regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA en sus siglas en inglés), entre otros, profundizaron en la liberalización comercial, llevando a la quiebra a los campesinos del Sur y convirtiéndolos en dependientes de las importaciones de alimentos de los países del Norte.

Los subsidios agrícolas estadounidenses y europeos, dirigidos mayoritariamente a la industria agroalimentaria, obvian al pequeño productor local. Este apoyo al *agrobusiness* significa una cuarta parte del valor de la producción agrícola en Estados Unidos y el 40% en la Unión Europea (Holt-Giménez, 2008). En el Estado español, los principales receptores de estas ayudas son las explotaciones más grandes: siete productores, entre ellos la duquesa de Alba, son los mayores beneficiarios de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Se calcula que un 3,2% de los grandes productores del Estado español reciben un 40% de estas ayudas directas (Intermón Oxfam, 2005), mientras que las explotaciones

familiares, que sostienen el medio rural en Europa y millones de campesinos en el Sur, no cuentan prácticamente con ningún apoyo y padecen la competencia desleal de estos productos altamente subvencionados.

De exportadores a importadores

Estas políticas de “desarrollo” económico impulsadas por las instituciones internacionales, con el beneplácito de los gobiernos respectivos y al servicio de sus corporaciones transnacionales, acabaron con un sistema de producción de alimentos local y sostenible, sustituyéndolo por un modelo de producción industrial e intensivo supeditado a los intereses capitalistas que nos condujo a la actual situación de crisis e inseguridad alimentaria global.

Países del Sur que, hasta hace unos cuarenta años, eran autosuficientes e incluso tenían excedentes de productos agrícolas por valor de mil millones de dólares, hoy son dependientes del mercado internacional e importan una media de once mil millones de dólares anuales⁴. Como señala Eric Holt-Giménez (2008): “El incremento del déficit de alimentos en el Sur refleja el aumento de excedentes de alimentos y la expansión del mercado en el Norte industrial” así como de su complejo agro-industrial. En los años 60, por ejemplo,



África exportaba unos 1.300 millones de dólares en comida, hoy el continente importa el 25% de sus alimentos.

México, la cuna del maíz, es un ejemplo de manual del arrebato de su soberanía alimentaria. La crisis de la tortilla, a principios del año 2007, con el aumento abrupto de su precio en un 60%, debido a la subida del coste del maíz, su componente básico, puso a México al borde de la crisis económica encendiendo la luz de alarma mundial. Los subsidios del gobierno estadounidense a la producción de agrocombustibles hicieron que destinar maíz para obtener etanol resultase más rentable que destinarlo a la producción de alimentos y en consecuencia se empujó su precio al alza.

Pero la crisis de la tortilla, como la crisis alimentaria hoy, tiene raíces más profundas y no se puede entender sin analizar el impacto de las políticas de libre mercado impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Washington en los últimos años, que convirtieron a México en una economía importadora y dependiente del maíz de Estados Unidos.

En agosto de 1982, el gobierno mexicano se declaró insolvente para pagar la deuda externa, pero la situación de crisis económica y social obligó al gobierno a endeudarse con los bancos comerciales y las instituciones internacionales. A cambio de los fondos pres-

tados para pagar el servicio de su deuda, el FMI y el Banco Mundial impusieron a México una serie de condiciones, a través de los Programa de Ajuste Estructural, consistentes en un fuerte intervencionismo: apertura de los mercados, eliminación de los aranceles y de las reglamentaciones estatales, contracción del gasto público, desmantelamiento del sistema de crédito estatal, de los subsidios a los insumos agrícolas, de los precios de garantía, poner fin a los servicios estatales de acopio, comercialización, almacenaje y aseguramiento de las cosechas, entre otros (Vivas, 2008; Bello, 2008).

A este golpe, como señala Walden Bello (2008), le siguió otro aún mayor: la entrada en vigor el 1 de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés) que tuvo como consecuencia la entrada masiva de maíz estadounidense altamente subvencionado, que inundó los mercados locales, acabando con los precios del maíz local y hundiendo al sector en una profunda crisis.

Con el cierre de la agencia estatal de comercialización de maíz, la distribución de maíz en México, tanto estadounidense como autóctono, quedó en manos de unas pocas transnacionales como Cargill y Maseca, quienes cuentan con un poder inmenso para especular con las tendencias comerciales. Este monopolio del sector les permite, por ejemplo, que un



alza en los precios internacionales del maíz no se traduzca en precios significativamente más altos para los pequeños productores locales (Bello, 2008; Patel, 2008).

Esta situación generó el abandono masivo del campo mexicano por parte de los pequeños productores de maíz, arroz, cría ganadera... quienes, al no poder competir con los productos subvencionados de Estados Unidos fueron expulsados a las ciudades-miseria (Davis, 2006). Se calcula que un total de 1,3 millones de campesinos abandonaron el campo ocho años después de la entrada en vigor del NAFTA, una parte importante de los cuales emigraron a Estados Unidos (Polaski, 2004).

Pero este caso es extrapolable a otros países del Sur, donde la aplicación sistemática de las políticas neoliberales a lo largo de estos años ha acabado no solo con un sistema de producción agrícola, ganadero y alimentario autóctono sino con cualquier tipo de protección y apoyo a sus comunidades, industrias y servicios públicos.

Siguiendo estos mismos dictados, en Sri Lanka, por ejemplo, el Banco Mundial propuso suprimir la producción de arroz, un cultivo tradicional desde hacía más de dos mil años y base de la alimentación local, porque resultaba más barato importarlo de Vietnam o Tailandia. (Houtart, 2006).

En Filipinas, la reestructuración económica neoliberal del estado, a lo largo de los años 90, transformó a un país exportador neto de alimentos, en el mayor importador de arroz del mundo, comprando anualmente en el mercado internacional entre uno y dos millones de toneladas de arroz para abastecer su demanda interna (Bello, 2008). La lógica del libre mercado ha condenado a estos países a una espiral de dominación y miseria.

Generando cambio climático

El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Como señala el informe Stern (2006), la agroindustria es una de las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero, incluso por delante del sector energético y del transporte. Como indica García (2008b), en base al informe Stern, si tomamos el impacto de la deforestación (que genera un 18% de los gases de efecto invernadero) y el impacto del modelo agrícola y ganadero actual (que produce un 14% de estos gases), ambos conceptos sumados son responsables de un 32% de los gases de efecto invernadero. Una cifra que puede atribuirse sin lugar a dudas al modelo de agricultura intensiva e industrial que sería la primera res-



ponsable del cambio climático a escala global, por delante del sector energético (24%) y del transporte (14%). Estos datos ponen de relieve el fuerte impacto del actual modelo agrícola en la erosión del medioambiente y su contribución a la crisis ecológica.

No podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, petrodependiente, etc.

Intensivo porque lleva a cabo una sobreexplotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad, por delante del cuidado del medio y la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática. De este modo, se rompe este equilibrio y la propia actividad agrícola intensiva acaba siendo generadora de CO₂ (Robert, 2002).

Industrial porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivo, etc. La utilización de tractores gigantes para labrar la tierra y procesar la comida contribuye sin duda a la liberación de más CO₂. Los fertilizantes químicos ineludibles en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso (NO₂), una de las principales

fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Al verterse estos fertilizantes sintéticos en la tierra, éstos reaccionan químicamente y se libera NO₂ (García, 2008b). Así mismo, la quema de bosques, selvas... para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.

Kilométrico y petrodependiente porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en búsqueda de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental de los combustibles fósiles usados para su transporte. Se calcula que en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos antes una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía utilizada para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas (Fundació Terra, 2006).

Según el estudio británico *Eating oil: food supply in a changing climate* (Jones, 2001) una comida dominical típica británica realizada con fresas de California, brócoli de Guatemala, arándanos de Nueva Zelanda, ternera de Australia, patatas de Italia, habichue-



las de Tailandia y zanahorias de Sudáfrica genera 650 veces más emisiones de carbono, debido al transporte, que si la misma comida hubiese sido realizada con alimentos cultivados localmente. Una práctica irracional, ya que muchos de los alimentos importados se producen localmente.

Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria y la crisis energética están íntimamente relacionadas.

Monopolios

Otro de los elementos que caracteriza al actual modelo agrícola y alimentario es el monopolio que ejercen unas pocas empresas multinacionales a lo largo de la cadena, desde la producción hasta el consumo.

Si empezamos por el primero de los tramos, las semillas, observamos cómo diez de las mayores compañías mundiales (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer...) controlan la mitad de sus ventas. Se trata de un mercado con un valor aproximado de 21 mil millones de dólares anuales, un sector relativamente

pequeño si lo comparamos con el de los pesticidas o el farmacéutico (ETC Group, 2005a), pero debemos tener en cuenta que se trata del primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, en consecuencia, de los riesgos que su control entraña para la seguridad alimentaria de las personas.

Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compañías derechos exclusivos sobre las semillas, han estimulado aún más la concentración empresarial y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autóctonas y la biodiversidad. De hecho, el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo está compuesto por semillas patentadas (sujetas a monopolios exclusivos como el de la propiedad intelectual) (ETC Group, 2008).

La industria de las semillas está íntimamente ligada a la de los plaguicidas. Las mayores compañías semilleras dominan también el sector de los plaguicidas y, frecuentemente, el desarrollo y comercialización de ambos productos se realizan juntos. Pero en la industria de los plaguicidas el monopolio es aún superior y las diez mayores firmas controlan el 84% del mercado global (ETC Group, 2005b).

En el 2007, como señala ETC Group (2008), la principal compañía de semillas y la mayor empresa química del mundo, Monsanto y BASF, emprendieron un acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo para



aumentar el rendimiento y la tolerancia a la sequía en el maíz, el algodón, la colza y la soja. Estos acuerdos permitieron a las empresas todos los beneficios de los mercados oligopólicos sin las restricciones antimonopólicas.

Esta misma dinámica, se observa en el sector de la gran distribución que cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales ha ido en aumento, situándose en la actualidad en un 45% del total, y se pronostica que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años (IDEAS, 2006). En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total⁵ (García y Rivera, 2007).

Este conjunto de multinacionales que controlan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria cuentan con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente. Unas corporaciones que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.

Una opción viable

Frente a este modelo, como señalábamos anteriormente, se antepone el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Uno de los argumentos que utilizan sus detractores es que este modelo es incapaz de alimentar al mundo. Pero, contrariamente a este discurso, varios informes demuestran que tal afirmación es falsa.

Así lo constatan los resultados de una exhaustiva consulta internacional impulsada por el Banco Mundial en colaboración con la FAO, el PNUD, la UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc., diseñado como un modelo de consultoría híbrida, que involucró a más de 400 científicos y expertos en alimentación y desarrollo rural durante cuatro años.

Es interesante observar cómo, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad alimentaria que la producción transgénica. El informe del IAASTD, publicado a principios del 2009, apostaba por la producción local, campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El informe fue rechazado por el *agrobusiness* y archi-



vado por el Banco Mundial, aunque 61 gobiernos lo aprobaron discretamente, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros.

En la misma línea, se posicionaba un estudio de la Universidad de Michigan, publicado en junio del 2007 por la revista *Journal Renewable Agriculture and Food Systems*, que comparaba la producción agrícola convencional con la ecológica. El informe concluía que las granjas agroecológicas eran altamente productivas y capaces de garantizar la seguridad alimentaria en todo el planeta, contrariamente a la producción agrícola industrializada y el libre comercio. Sus conclusiones indicaban, incluso en las estimaciones más conservadoras, que la agricultura orgánica podía proveer al menos tanta comida de media como la que se produce en la actualidad, aunque sus investigadores consideraban, como estimación más realista, que la agricultura ecológica podía aumentar la producción global de comida hasta un 50%.

Varios estudios demuestran cómo la producción campesina a pequeña escala puede tener un alto rendimiento, a la vez que usa menos combustibles fósiles, especialmente si los alimentos son comercializados local o regionalmente. En consecuencia, invertir en la producción campesina familiar es la mejor opción para luchar contra el cambio climático y acabar con la pobreza y el hambre, garanti-

zando el acceso a los bienes naturales, y más cuando $\frac{3}{4}$ partes de las personas más pobres del mundo son pequeños campesinos.

En el ámbito de la comercialización se ha demostrado fundamental, para romper con el monopolio de la gran distribución, el apostar por circuitos cortos de comercialización (mercados locales, venta directa, grupos y cooperativas de consumo agroecológico...), evitando intermediarios y estableciendo unas relaciones cercanas entre productor y consumidor, basadas en la confianza y el conocimiento mutuo, que nos conduzcan a una creciente solidaridad entre el campo y la ciudad.

En este sentido es necesario que las políticas públicas se hagan eco de las demandas de estos movimientos sociales y apoyen un modelo agrícola local, campesino, diversificado, orgánico y que se prohíban los transgénicos, se promuevan bancos públicos de tierras, una ley de producción artesana, un mundo rural vivo... En definitiva, una práctica política al servicio de los pueblos y del ecosistema.



Notas

- ¹ Según datos de marzo del 2008 y en relación con el año anterior.
- ² Si miramos a las cifras podría parecer que los resultados de la revolución verde, en el período de 1970 a 1990, fueron exitosos. El total de alimentos per cápita a nivel mundial aumentó, según la FAO, en un 11% y el número de hambrientos descendió también en un 11%. Pero si quitamos de este análisis global a China, que en ese período no llevó a cabo ninguna revolución verde sino una profunda reforma agraria, entonces los resultados ponen de relieve como a pesar de la tan cacareada revolución verde, en estos años, el número de personas hambrientas pasó de 536 millones a 597, un incremento del 11%, según la FAO (Riechmann, 2003).
- ³ Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) son las condiciones impuestas por parte del FMI y/o el Banco Mundial a un país para otorgarle el respaldo financiero necesario para afrontar el pago de su deuda externa.
- ⁴ Datos del año 2001 (Holt-Giménez, 2008).
- ⁵ Algunas de estas cifras han sufrido cambios desde el año 2000.

Bibliografía

- ANTENTAS, J.M. Y VIVAS, E. (2009) "Internacionalismo(s) ayer y hoy" en *Viento Sur*, 100, pp. 33-40.
- BELLO, W. (2008) *Cómo generar una crisis mundial de los alimentos: lecciones del Banco Mundial, el FMI y la OMC en:* <http://alainet.org/images/Enfoque%20sobre%20Comercio%20140.pdf>
- BELLO, W (2009). *The Food Wars*. Londres. Verso.
- BORRAS, S. (2004). *La Vía Campesina*. Amsterdam. Transnational Institute.
- DAVIS, M. (2006) *Planet of slums*. Londres. Verso.
- DESMARAIS, A.A. (2007) *La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado*. Madrid. Editorial Popular.
- FUNDACIÓ TERRA (2006) "Seguretat alimentària" en *Perspectiva ambiental*, nº 36, pp. 1-32.
- GARCÍA, F. (2008a) *Especulandia. Introducción a la especulación alimentaria en:* http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Especulandia_ACCD-2.pdf
- GARCÍA, F. (2008b) *Cultivando el desastre en* <http://www.veterinariossinfronteras.org/ProjectDocuments/Denuncia/6/Cultivando%20el%20desastre.pdf>

- GARCÍA, F. Y RIVERA, M. (2007) "La revolución del supermercado: ¿producir alimentos para quién?" en Montagut, X. y Vivas, E. Supermercados, no gracias, Barcelona, Icaria editorial, pp. 33-45.
- GRAIN (2008), El negocio de matar de hambre en: <http://www.grain.org/articles/?id=40>
- HOLT-GIMÉNEZ, E. (2008) La crisis mundial de alimentos: que hay detrás y qué podemos hacer en: <http://www.ircamericas.org/esp/5627>
- HOLT-GIMÉNEZ, E. Y PATEL, R. (2010) Rebeliones alimentarias. Barcelona. El Viejo Topo.
- HOLT-GIMÉNEZ, E. Y PEABODY, L. (2008) De rebeliones por comida a la soberanía alimentaria: llamado urgente para reparar el destruido sistema alimentario en: <http://alainet.org/active/24201>
- HOUTART, F. (2006) "¿Por qué los pequeños campesinos arroceros deben desaparecer en Sri Lanka?" en Boron, A. y Lechini, G. Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina, Buenos Aires, CLACSO.
- IDEAS (2006) La gran distribución: supermercados, hipermercados y cadenas de descuento en: http://www.ideas.coop/archivos/documentos/B15_OCT_Grandesuperficies.pdf
- Intermón Oxfam (2005), Goliat contra David en: http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/520/dc170305_Goliat_%20contra_%20David%20.pdf
- JONES, A. (2001) Eating oil: food supply in a changing climate, Londres, Sustain.
- MONTAGUT, X. Y VIVAS, E. (2007) Supermercados, no gracias. Barcelona. Icaria editorial.
- MCMICHAEL, P. (2006) "Feeding the world: agriculture, development and ecology" en Panitch, L. y Leys, C. Socialist Register 2007. Londres, Merlin Press, pp. 170-194.
- PATEL, R. (2008) Obesos y famélicos. Barcelona. Los Libros del Lince.
- POLASKI, S. (2004) Mexican employment, productivity and income a decade after NAFTA en: <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=1473>
- RIECHMANN, J. (2003) Cuidar la T(t)ierra. Barcelona. Icaria editorial.
- ROBERT, M. (2002) Captura de carbono en los suelos para un mejor manejo de la tierra en: <ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/wsrr96s.pdf>
- ROSSET, P. (2009) "Fixing our global food system" en Monthly Review, n°61, pp. 114-128.
- ROSSET, P., Collins, J., y Moore Lappé, F. (2000) "Lecciones de la Revolución VERDE" en Revista del Sur, n° julio-agosto 2000.



Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas (2010) "Recorrido por las luchas campesinas" en Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, nº1, pp. 3-10.

STERN, N. (2006) Stern review: the economics of climate change en: www.sternreview.org.uk

VIVAS, E. (2008) En pie contra la deuda externa. Barcelona. El Viejo Topo.

VVAA (2001) Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de La Habana (Cuba) en: http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=741

VVAA (2003) Nuestro mundo no está en venta. Primero está la soberanía alimentaria de los pueblos ¡Fuera la OMC de la agricultura y la alimentación! en: http://www.viacampesina.org/main_sp/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=345



